

El futuro científico de Cataluña

(reflexiones no publicadas tras la experiencia de gobierno de un par de años del Tripartit a Catalunya) editado el 27 de junio de 2006

Mientras nadie discute la necesidad de revisar el modelo de crecimiento económico en Cataluña, y mientras prácticamente nadie se atreve a cuestionar que nuestro futuro pasa por desarrollar una economía basada en actividades intensivas de conocimiento, las políticas públicas relativas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación siguen siendo tímidas y poco ordenadas.

Tras décadas de practicar el “que inventen ellos”, los gobiernos tanto de la administración central como el de Cataluña han comenzado a desarrollar políticas de fomento de la I+D+I. En consecuencia, Cataluña ya juega en la liga mundial de la investigación científica, sin embargo aún ocupa puestos de liderazgo en la segunda división, debido a que se parte de muy abajo y a que las convicciones que verbalizan nuestros dirigentes políticos luego no tienen un fiel paralelismo con las políticas que se ponen en marcha. Si la I+D+I en Cataluña correspondiera al grado de nuestro desarrollo económico, la inversión pública debería ser un 50% mayor y la inversión privada, la más retrasada al respecto, debería ser un 100% la actual.

Recuerdo los últimos meses del Gobierno presidido por Jordi Pujol, cuando públicamente reconocía la necesidad de establecer firmes políticas en I+D, cuando públicamente se descubría ante las directrices de su consejero Andreu Mas-Colell, sin duda, el primero en desarrollar políticas públicas de I+D de segunda y tercera generación. La etapa Mas-Colell aún da frutos muy tangibles (la mayoría de proyectos Consolider adjudicados en Cataluña han ido a investigadores de centros creados por él), sin que el movimiento pendular de su sucesor Carles Solà haya podido diluirlo.

La llegada del gobierno catalanista y de izquierdas fue extraordinariamente esperanzadora. Pero los pactos de formación del gobierno de coalición con la escasez de cuadros de ERC supusieron perpetuar un modelo de distribución de carteras que, el propio programa electoral socialista consideraba periclitado, y lo sigue estando. La inexistencia de un programa político sólido en ERC se hizo notar en muchos frentes. Aún recordamos cuando al principio el Conseller Solà puso en crisis el tan celebrado y reconocido externamente programa ICREA, o como se suprimió sin más el apoyo a los doctorados en inglés, uno de tantos necesarios instrumentos de internacionalización de nuestra actividad científica, por poner sólo algunos ejemplos.

En materia de I+D+I, la política del tripartito ha sido sinuosa y, a veces, contradictoria. El resultado neto, en cuanto a aumento de inversiones y gasto, es muy positivo, pero el otro componente, la necesaria continuidad en las políticas, está granada de ejemplos adversos. Por ejemplo, la inversión dirigida a la creación de nuevos centros ha aumentado considerablemente, pero la destinada a las universidades ha seguido una respetable política territorial y de café para todos que se sabe lo poco adecuada que resulta para este tipo de objetivos. Los problemas de continuidad, verdadero acicate de todo proyecto científico, están poniendo demasiada incertidumbre en los centros de investigación y algunas universidades. Ante los problemas de coordinación e inacción que han demostrado los departamentos de industria e universidades, destaquemos la mayor implicación del departamento de salud y, muy en particular, tanto el apoyo directo del consejero de economía A Castells cómo la determinación del entorno de presidencia en situar la investigación y la innovación como eje principal de la política del tripartito. Puedo

afirmar que la visión del presidente Maragall, singularizada en el impulso de la Bioregión, no ha sido correspondida por su gobierno en pleno. Y nuestro deseo es que esto se supere. Para ello serán necesarios algunos compromisos que deben ser asumidos con la misma convicción que los equilibrios hechos sobre la paridad.

Dada la encrucijada en la que se encuentra Cataluña, separar las competencias de industria e investigación (en la que incluyo universidades) probablemente no es ha sido un buen negocio. Y nos gusta pensar que la actual rebaja de investigación y universidades a la categoría de secretaría sectorial es algo muy coyuntural. Desde la CIRIT se ha planificado un plan que, por primera vez, superaba el secular divorcio entre los responsables de industria y de universidades. Pero en la práctica se convirtió en papel mojado. Las disputas internas se han traducido en duplicidad de políticas, éste sería el caso del impulso a la transferencia de tecnología.

Habría FCC cuando más allá de la retórica en los programas y en los discursos electorales, los gobernantes desarrollen políticas concretas. El día en que se le discuta al intocable consejero de obras públicas de turno el capítulo de inversiones sustanciales para viales y carreteras (necesarias para resolver las necesidades de tráfico derivadas del modelo insostenible de segunda residencia), o el de inversiones para infraestructuras en ayuntamientos donde el sector inmobiliario promueve una Cataluña parque temático con el turismo como única fuente de ingresos.

Los gobiernos no pueden seguir invirtiendo en I+D sin tener evidencias de los retornos y beneficios socio-económicos de estas políticas. En el Pacto del Tinell se anunciaba la creación de una agencia de evaluación y prospectiva. Mientras Cataluña carece de un órgano de este tipo, se cuentan ya cuatro las ventanillas a las que deben acudir los científicos para diversos procesos de evaluación.

Ya hace años que la política catalana y española de I+D se ha venido beneficiando del poder de seducción de científicos galácticos implicados en proyectos concretos. Tanto los grados de implicación como los resultados están siendo muy desiguales, pero el resultado neto es positivo, por ahora. Falta equilibrar adecuadamente el trato que se ofrece a los consagrados con políticas de des-precarización y de mayor compromiso con el grueso de talentos jóvenes que se han ido incorporando paralelamente. Cuando se recibe dinero público todos tenemos la obligación de actuar con transparencia y de rendir cuentas. Por ello los responsables políticos deben ser tan prudentes como firmes ante discutibles exigencias que fácilmente aparecen desde personalidades acostumbradas a la inexistencia de ciertos límites, ante científicos bandera que, a veces, no son conscientes que están jugando en un país de la segunda división. ¿Hemos tocado techo en galácticos a tiempo parcial?